



## Historia, poder y periodismo de investigación en Chile

POR ANDREA INSUNZA

El periodismo de investigación sigue siendo un oficio más bien solitario, destinado preferentemente a la elite. Su patrimonio es que puede definir su propia pauta, cuestión que en los últimos 30 años ha permitido sumar nuevos actores al escrutinio público, algo esencial para la salud de la democracia.

I  
Hasta ahora, el antes, durante y después del golpe militar, así como lo ocurrido durante la dictadura y los primeros años de la transición, han sido los asuntos más abordados por el periodismo de investigación en Chile. Dos han sido las aproximaciones utilizadas: el reporte urgente y contingente de las violaciones a los derechos humanos, particularmente en los 80, y la reconstrucción más reposada e histórica sobre lo acaecido en esos años.<sup>1</sup>

En el primer caso, inicialmente los esfuerzos por sistematizar antecedentes acerca de lo ocurrido después del 11 de septiembre de 1973 en materia de violaciones a los derechos humanos fueron concentrados por la Iglesia Católica y los abogados que colaboraron en el Comité Pro Paz y en la Vicaría de la Solidaridad. El turno de los periodistas llegaría a fines de esa década, luego de que en 1976 apareciera *Apsi*, un año después lo hiciera *Hoy*, en 1979 *Análisis* y en 1983 *Cauce*, las cuatro principales revistas de oposición en la época.<sup>2</sup> Los reporteros de esas revistas harían un valioso seguimiento de la represión de esos años y, a poco andar, lo sistematizarían en libros.

Bastan algunos títulos aparecidos en esos años para graficar su importancia. *Detenidos desaparecidos: una herida abierta* (1979), de Claudio Orrego y Patricia Verdugo; *Bomba en una calle de Palermo* (1985), de Mónica González y Edwing Harrington, y *Asesinato en Washington* (1980), de los estadounidenses John Dinges y Saul Landau,<sup>3</sup> corresponden a tres relatos sobre gravísimos asuntos que fueron desestimados y negados por las autoridades de la época. Por un lado, la práctica institucionalizada de la desaparición forzada de personas y, por otro, las dos operaciones más elaboradas de la DINA en el extranjero: el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos

Prats, en Buenos Aires, en 1974, y el del ex canciller Orlando Letelier, en Washington, en 1976.

La existencia de centros de detención clandestinos, la bala que dejó sin vida al sacerdote André Jarlan en 1984, el degollamiento de tres profesionales comunistas el 85, el caso de los jóvenes quemados vivos el 86 o el de la Operación Albania el 87, fueron investigados por estos *medios y periodistas opositores*, a pesar de la censura y las represalias –la detención, destierro, exilio y asesinato de algunos de ellos–, cumpliendo el precepto básico del periodismo de investigación: ser un contrapeso del poder, que desconfía de las versiones oficiales y las echa abajo cuando no resisten la evidencia.

En los hechos, esos reporteros indagaron lo que los tribunales no. Hay investigaciones mejor logradas que otras; hay información que, en el futuro, sería corregida. Pero es innegable que, en lo sustancial, estos libros documentaron la represión institucional bajo la dictadura que, salvadas excepciones, la justicia empezaría a investigar recién en los 90.

Ese enervante paréntesis, en todo caso, no impediría que estas publicaciones cumplieran otro de los propósitos del periodismo de investigación: sentar las bases, en los casos en que los hechos así lo ameritan, para la apertura de procesos judiciales.

En 1998, en rigor, el juez Juan Guzmán citó a la periodista Patricia Verdugo a su despacho. Al recibirla, le mostró un ejemplar de su libro *Los zarpazos del Puma*, subrayado y con notas en los márgenes. Una década antes, en 1989, Verdugo había relatado en 289 páginas gran parte del trayecto realizado por la Caravana de la Muerte, la comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano Stark, que en octubre de 1973, por orden de Augusto Pinochet, se constituyó en distintas ciudades del país, seleccionó a más de 72

**Andrea Insunza.** Periodista. Coautora de los libros *Bachelet: la historia no oficial* y *Legionarios de Cristo en Chile: Dios, dinero y poder*.

prisioneros políticos, los ejecutó y en algunos casos los hizo desaparecer.<sup>4</sup>

Ése era el caso que desvelaba al magistrado y el libro se había convertido en su guía en medio de una indagatoria que terminaría siendo histórica: por obra del mismo juez, en 2001 Pinochet sería procesado por primera vez en Chile, acusado de secuestro y homicidio calificado.<sup>5</sup> Verdugo recordaría que, al terminar el encuentro, Guzmán le dijo: “Gracias, la felicito, hizo una muy buena investigación”. El magistrado, de hecho, incorporaría el libro como medio de prueba en el expediente, pues ahí estaba descrito el *modus operandis* de la Caravana y esbozado parte del rol de Pinochet en los hechos.

El ejemplo sirve para graficar cómo el periodismo de investigación colaboró, entonces, para que las violaciones a los derechos humanos pasaran de ser *presuntas* a convertirse en *verdaderas*. No se trata sólo de la experiencia de los 80. Esta suerte de *tradición* del periodismo de investigación chileno es palpable aún hoy en casos como los de Rodrigo Anfruns, Víctor Jara o del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, y también en la impactante pesquisa de Paul Schaeffer, a cargo de Canal 13, todos asuntos investigados en los últimos años.

A este periodismo de investigación, que cumplió su rol como denunciante, se sumó otro enfoque de trabajo, a medio camino entre el periodismo y la historia, el que sería desarrollado desde fines de los 80 hasta hoy. Tal como en el caso anterior, esas investigaciones saldarían parte de la deuda de los diarios de la época (y de la televisión), que cumplieron el rol exactamente opuesto: amplificar las versiones oficiales transmitidas desde el poder.<sup>6</sup>

Es posible, entonces, leer acerca de la historia reciente de Chile gracias a la investigación periodística. Los prolegómenos del golpe militar y el rol jugado por Estados Unidos están en *La*

*conjura* (2002), de Mónica González, y *Allende: cómo la Casa Blanca provocó su muerte*, de Verdugo. Los días previos y lo ocurrido el 11 de septiembre de 1973, dentro y fuera de La Moneda, en *El día que murió Allende* (1988), de Ignacio González Camus, y *Golpe. 11 de septiembre de 1973* (2003), de Ascanio Cavallo y Margarita Serrano, además del número de la revista *Análisis* que en su portada de fines de diciembre de 1985 tituló “Documento histórico: la grabación del Golpe”, reproduciendo el diálogo sostenido esa mañana del martes 11 de septiembre de 1973 entre Pinochet y el almirante Patricio Carvajal, quien a su vez se comunicaba con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh. Ese primer reportaje fue realizado por los periodistas Fernando Paulsen y María Olivia Monckeberg, mientras que en 1998 Patricia Verdugo publicaría un CD con la grabación y un relato de la jornada, en el libro *Interferencia secreta. 11 de septiembre de 1973*.

Sabemos, gracias a estas investigaciones –necesariamente previas al trabajo de los historiadores–, que la afirmación de Pinochet respecto de que él lideró la planificación del derrocamiento de Allende es falsa y que, en realidad, el general se sumó sólo al final a la conjura. Sabemos, también, que la versión esparcida preferentemente por el régimen cubano sobre que el líder de la UP murió asesinado en un enfrentamiento con militares en La Moneda –la que Gabriel García Márquez asumió como *verdad* en su artículo “Crónica de una tragedia organizada”– es falsa, pues el ex Presidente se suicidó en su despacho. A fines de los 80, González Camus hizo un notable trabajo al desestimar la versión del enfrentamiento y, veinte años después, Eduardo Labarca terminó de humanizar al personaje al mostrarnos en *Salvador Allende. Biografía sentimental* (2007) a un líder de la UP nervioso, consciente de que vivía sus últimos días, arrancándose los bigotes en los momentos de mayor agobio y tomando valium para dormir.

El 1 de diciembre de 1987, con Pinochet aún en el poder, apareció en el diario *La Época* el primer fascículo de *La historia oculta del régimen militar*, de los periodistas Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúlveda. Durante prácticamente todo el 88, el año del plebiscito, aparecieron semanalmente los capítulos de esta investigación que relata, con acuciosidad, lo ocurrido en las entrañas de un régimen que se mantuvo al margen del escrutinio público durante 17 años. En ese relato se describe cómo la dictadura no sólo enfrentaría a la oposición, sino que además viviría distintas etapas de luchas intestinas de poder para finalmente diseñar y poner en marcha una nueva institucionalidad política y económica. El foco está, entonces, en cómo Pinochet administró su poder, atravesó momentos críticos como el aislamiento internacional, la cuasi guerra con Argentina el 78, la crisis económica del 83, las protestas de los años sucesivos y el atentado del 86 y, a pesar de todo eso, consiguió llevar a la oposición a pactar un itinerario para poner fin a la dictadura a través de un plebiscito que, contra sus pronósticos, perdió.

La importancia de estos libros es capital. No encontraremos en las páginas de diarios y revistas de la época información del calibre de la expuesta en estas obras. Más aun, estas investigaciones se convertirían –especialmente *La historia oculta del régimen militar*– en referencia obligada para sociólogos, cientistas políticos e historiadores, tanto en Chile como en el extranjero.

Así, antes de escuchar acerca de la dupla “Woodstein” –Bob Woodward y Carl Bernstein, los reporteros de *The Washington Post* que en 1974 estuvieron a cargo de la cobertura del Watergate, el caso que obligaría a Richard Nixon a renunciar a la Presidencia de Estados Unidos–, los futuros periodistas que crecimos en los 80 lo hicimos entre los relatos de Verdugos, González y Cavallos.

Visto así, el periodismo de investigación en Chile alcanzó un desarrollo notable.

Pero toda historia tiene su revés.

La primera vez que vi un ejemplar de *Los zarpazos del Puma* fue a los 14 años, en el verano de 1990. El libro estaba sobre la arena, en la playa, mientras el viento golpeaba la tapa de arriba hacia abajo. No supe, en verdad, hasta después, que se trataba de ese libro en particular, pues la portada estaba envuelta en papel de diario. Que hubiese libros o revistas cubiertos por papel de regalo o de envolver, y hasta por una improvisada página de diario, no era sorprendente. Había, entonces, revistas y libros incómodos. Había, en definitiva, verdades incómodas. Algo que parecía de toda lógica en una dictadura.

Pero esa incomodidad se perpetuó durante los primeros años de la transición, cuando publicar algunas evidencias de dicho proceso político podía causar graves turbulencias institucionales. El 24 de agosto de 1990, a poco más de cinco meses de asumir la Presidencia, Patricio Aylwin pronunció un discurso en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), donde solicitó a propietarios y directores de medios que “extremen su cuidado, a fin de que, al cumplir su tarea de informar, sean vehículos de unidad y no de disensión, de verdad, y no de error”. ¿A qué podía dedicarse un periodista, entonces, en años en que la verdad –y no el error– provocaba disensión? Baste recordar que el titular de *La Nación* del 28 de mayo de 1993, que rezaba “Reabren caso cheques del hijo de Pinochet”, provocó el *boinazo*, uno de los dos movimientos militares más críticos de la época.<sup>7</sup>

Ésa es la razón por la cual *Crónica de la transición* (1995), de Rafael Otano, y *La historia oculta de la transición* (1998), nuevamente de Cavallo, contienen una serie de revelaciones sobre temas abordados superficialmente o ignorados por los

4. El juez Juan Guzmán establecería después que las víctimas fueron más. En el caso de Pinochet, el juez lo responsabilizó por 57 casos de ejecutados políticos y 18 de detenidos desaparecidos.

5. El 29 de enero del 2001 Guzmán sometió a proceso a Pinochet como coautor de secuestro y homicidio calificado. El 8 de marzo del 2001 la Primera Sala de la Corte de Apelaciones rebajó los cargos de autor a encubridor. El 1 de julio de 2002, la Corte Suprema sobreeseyó el caso por razones de salud. Sin embargo, en 2006, el mismo tribunal desaforó a Pinochet en el marco del mismo caso, esta vez por dos secuestros y homicidios calificados. El 27 de noviembre de 2006, el juez Víctor Montiglio procesó al general, quien falleció el 10 de diciembre de 2006 sin haber sido condenado en éste u otros casos investigados por los tribunales chilenos.

6. El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, entregado en junio de 2005, efectúa un análisis acerca del rol jugado por los medios de comunicación en dictadura. Resume: “El clima de impunidad que favoreció las graves violaciones de los derechos humanos bajo escrutinio de esta Comisión, encontró asidero en la concentración de poderes [...]; en el total control de los medios de comunicación e, inclusive, en el activo apoyo por parte de diversos medios escritos y de televisión a la acción del gobierno militar” (pág. 186). El caso de *El Mercurio*, por otro lado, ha sido abordado en el documental *El diario de Agustín* (2008), de Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, y en el libro *El diario de Agustín: cinco estudios de casos de violaciones a los derechos humanos (1973-1990)*, de Claudio Salinas, Hans Stange, Raúl Rodríguez, Paulette Dougnac, María José Vilches y Elizabeth Harries (Lom Ediciones, 2009).

medios de la época.<sup>8</sup> No es que los hitos de los dos primeros gobiernos de la Concertación hayan estado ausentes de los titulares. Es que estos libros son el revés del consenso, que operaba como el paso previo al acuerdo: aquí se muestra cómo se hizo política desde el 90 en adelante y la variedad de actores que participaron en ella. Aquí, tal como en *La historia oculta del régimen militar*, la aproximación a los personajes incluye las miserias de cada uno de ellos. Con una soltura narrativa a ratos irónica, en ellos se cuenta lo que ocurría en las bambalinas de las conferencias de prensa.

Corolario: que la historia reciente haya sido la materia prima de la investigación periodística durante los 90 no fue sólo producto del genuino interés de estos autores y de otros citados anteriormente, sino también el resultado de que, en no pocas ocasiones, escudriñar el presente acarrea riesgos mayores que detenerse en el pasado.

Quedarían, por ende, otros sucesos que fueron reconstruidos en el futuro, consolidando esta variante del género que vuelve sobre antiguos sucesos. En 2001 *La Tercera* publicó *La historia inédita de los años verde olivo*, de Javier Ortega, el primer documento periodístico sobre la historia del FPMR y la influencia de Cuba en su accionar. El atentado contra Pinochet –reconstruido inicialmente en *Operación siglo XX* (1990), de Patricia Verdugo y la abogada Carmen Hertz– fue la excusa para que en 2007 Cristóbal Peña publicara *Los fusileros*, con la historia de los doce frentistas que participaron en la fallida operación y lo ocurrido después.

## II

1999 fue el año en que la prudencia periodística se vino abajo. El 13 de abril fue lanzado *El libro negro de la justicia chilena*, de Alejandra Matus. Esa investigación, iniciada en 1992, terminó siendo una radiografía

sumamente crítica del rol de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema, durante la dictadura y la transición. No sólo por la ya conocida indolencia con que la justicia abordó las violaciones a los derechos humanos, sino porque retrataba las lógicas de un mundo corrompido, en el que algunos magistrados abusaban de su poder conscientes de que gozaban de total impunidad.

El libro fue, primero, el reflejo más bullado de que una nueva generación de periodistas entraba al ruedo de la investigación. Una generación que, en alguna medida, era depositaria de la anterior, pero que no cargaba con todas sus amarras. Al nombre de Matus se sumarían los de Juan Andrés Guzmán y Marcela Ramos, y más adelante los de Soledad Pino, Pablo Vergara, Ana María Sanhueza, y los ya mencionados Cristóbal Peña y Javier Ortega.<sup>9</sup>

Pero más determinante que el surgimiento de este relevo generacional fue que *El libro negro...* se transformó en la clara expresión de que cambiaría el trato hacia la autoridad, retomando el principio de que el periodismo debe mantenerse a distancia del poder, para examinarlo críticamente, de modo de favorecer así la democracia.

Ese mensaje llegó a puerto. Al día siguiente de su lanzamiento, los ejemplares de *El libro negro...* fueron requisados a raíz de un requerimiento por ley de seguridad del Estado, presentado por el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, uno de los personajes retratados en la obra. Así, el libro fue censurado mientras su autora pidió asilo en Estados Unidos, luego de que Jordán echara mano a un cuerpo legal que equiparaba el ejercicio de la libertad de expresión con un delito contra el orden público. Dos años después, en mayo de 2001, ese artículo fue derogado con la promulgación de la nueva ley de prensa. Matus regresó a Chile a mediados de ese año, pero recién en octubre la Corte de

Apelaciones autorizó la circulación de su libro.

La publicación de *El libro negro...* coincidió con dos hechos que generarían un cambio en la industria de la prensa. El primero fue la detención de Pinochet en Londres, en octubre de 1998. El arresto simbolizó la caída de los intocables. El segundo fue la competencia entre los dos principales diarios, *El Mercurio* y *La Tercera*. El “golpe noticioso” adquirió importancia. Las fuentes *en off* también. A poco andar, periodistas “encubiertos” o cámaras ocultas se volverían comunes en la televisión. Y el debate ético se encendería.

El saldo: en 2000 la jueza Gloria Olivares sería removida de la Corte de Apelaciones; un año después, y por primera vez en su historia, la Corte Suprema expulsaría a uno de sus miembros, el magistrado Luis Correa Buló; en 2002 la revista *Qué Pasa* destaparía el “caso coimas” por el que los diputados DC Cristián Jiménez y Luis Pareto y el PPD Víctor Manuel Rebolledo serían desaforados y, cinco años después, condenados. En enero de 2003 la Corte Suprema nombraría a la jueza Gloria Ana Chevesich para investigar el “caso MOP-Gate”, que puso de cabeza al gobierno de Ricardo Lagos.

La Moneda interpretó erróneamente que la profusa cobertura sobre el último caso –a veces, efectivamente majadera– era resultado de una operación de los dos principales diarios, ligados a la derecha. No entendieron entonces que estas investigaciones estaban mucho más relacionadas con el ajuste del periodismo chileno, que comenzó a pedir cuenta, sin complejos, sobre las actuaciones de las autoridades, abordando asuntos de interés público. Por eso se explica que en 2003 un grupo de periodistas renunciara a *La Nación Domingo* cuando fue censurado un artículo sobre corrupción en el Indap.<sup>10</sup>

La idea, entonces, de un periodismo fiscalizador, comenzó a imponerse en la industria. Si en dictadura la tensión entre la

investigación periodística y el poder estaba dada por la postura ideológica de unos medios opositores que bregaban por el fin la dictadura versus una autoridad que buscaba limitarlos, a fines de los 90 se produjo un reordenamiento en que periodistas y autoridades quedaron, como siempre debió haber sido, en veredas opuestas.

La misma lectura hizo la TV, el único medio de la industria que en Chile posee hace años equipos exclusivos de periodistas dedicados a la investigación. Aunque los gustos de las audiencias han contribuido a desperfilar a estos programas, basta revisar la última temporada de *Informe especial* (TVN) y *Contacto* (Canal 13) para comprender que en la pauta de estos programas el rol del periodismo como “cuarto poder” ya está afinado: el reportaje de TVN sobre la Cámara de Diputados precipitó una serie de cambios en el procedimiento para fijar y administrar las asignaciones de los parlamentarios, mientras que el director de Investigaciones, Arturo Herrera, tuvo que renunciar a su cargo después de que Canal 13 revelara la existencia de una red de prostitución infantil frecuentada por funcionarios de la policía civil de la Quinta Región.

Se podrá discutir si esos reportajes son ejemplos de buen o mal periodismo, si están bien o mal logrados, si pudieron ser más incisivos o no, en fin, pero hay que reconocerles que se enfrentan al poder y mantienen un diálogo más constructivo con las audiencias. El reportaje de *Contacto* contrasta con programas como *Policías en acción* (Chilevisión) o *133. Atrapados por la realidad* (Megavisión), donde una cámara sigue a funcionarios de Investigaciones y Carabineros en sus redadas, sin establecer el más mínimo filtro respecto de si esos procedimientos se ajustan o no a derecho, y sin respetar la presunción de inocencia de los detenidos. Peor aun, se repiten tomas, se alteran sitios del suceso, en fin, se reviste de “entretención” a programas que, hasta

7. Es posible encontrar un detallado análisis acerca de las restricciones a las que se adecuaron los medios durante los gobiernos de Aylwin y Frei en *Los límites de la tolerancia. Libertad de expresión y debate público en Chile* (Lom Ediciones, 1998), de Human Rights Watch.

8. Este período se caracterizó, además, por el cierre de medios escritos opositores a la dictadura, muchos de los cuales habían alentado el periodismo de investigación en los 80. *Cauce* cerró en 1989, el diario *Fortín Mapocho* en 1990, *Análisis* en 1993, *Apsi* en 1994, *La Época* en 1998 y *Hoy* en 1998.

9. El libro de Matus surgió de una idea de Mónica González. Sus ayudantes de investigación, los periodistas Juan Andrés Guzmán y Marcela Ramos, habían colaborado ya con Rafael Otano, Patricia Verdugo y Manuel Salazar. A esas alturas, tanto Matus como Guzmán y Ramos habían escrito sus primeros libros; Matus –en coautoría con Francisco Artaza– publicó *Crimen con castigo* (1996), sobre el caso Letelier, mientras que Guzmán y Ramos editaron *La extraña muerte de un soldado en tiempos de paz* (1998) y *La guerra y la Paz Ciudadana* (2000).

10. El artículo, escrito por Alejandra Matus, se titulaba “La caja negra del Indap” y se refería al pago de sobresueldos de seis ejecutivos de esa repartición del Estado. El diario publicó finalmente la nota, pero eso no frenó la renuncia del equipo de periodistas, quienes fundaron el semanario *Plan B* (2003-2005).

involuntariamente, quedan reducidos a ser nada más que relaciones públicas, pero que son premiados por el rating.

Es cierto. El periodismo de investigación es caro: financia a periodistas durante semanas, meses o años para producir un solo producto que, por lo demás, reditúa poco económicamente. Y la industria necesita –y debe– ser rentable económicamente. Pedirle otra cosa es no comprender el escenario actual. Esto explica que los principales medios escritos todavía no cuenten con equipos exclusivos de investigación.

En 20 años, las experiencias se reducen a un trío: *La Nación*, a mediados de los 90, que financió la investigación de Alejandra Matus y Francisco Artaza sobre el caso Letelier; la revista *Hoy*, que antes de cerrar en 1998 publicó como serie periodística *La historia oculta de la transición*, y *La Tercera* con *La historia inédita de los años verde olivo*. En esos casos, periodistas de planta se dedicaron a reportear productos de más largo aliento. Pero se trata de excepciones. En los 80, de hecho, hubo más esfuerzos en este sentido, entre otras cosas porque algunas casas editoriales como Cesoc, Emisión o Del Ornitorrinco poseían estrechos lazos con los medios y reporteros opositores que se dedicaban a la investigación.

Hoy, en el periodismo escrito, el único medio que se dedica exclusivamente a este género es el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciperchile), dirigido por los periodistas Mónica González y John Dinges, y financiado por Copesa. El año pasado ya fue premiado por haber destapado un caso de corrupción en el Registro Civil, forzando la renuncia de su director, Guillermo Arenas.

Con todo, el cuadro general muestra que en la medida en que la democracia chilena se consolidó –cuestión que quedó más que despejada cuando, más allá de la inquietud de la elite, la detención de Pinochet no alteró el curso del país–, la industria de los

medios ha estado más atenta a ejercer su rol como contrapeso del poder. Eso sí, del poder formal. Ahí está el principal déficit del periodismo de investigación en Chile, incapaz hasta ahora de dar cuenta de todo el arco de actores que participan del proceso de toma de decisiones en el país.

### III

En 2003, la periodista María Olivia Monckeberg publicó *El imperio del Opus Dei en Chile*, sobre la influyente prelatura católica ligada a un sector del empresariado más aristocrático y conservador. Dos años más tarde apareció *La sagrada familia. La historia secreta de las diez familias más poderosas de Chile*, de Hernán Millas, que incluía un perfil de clanes como los Matte o los Piñera.

En la primera mitad de 2000 –mientras la industria vivía el período más álgido de enfrentamiento con las autoridades– los libros de investigación periodística evidenciarían un giro táctico, al escrutar a otros grupos de poder, menos institucionalizados y de naturaleza fáctica, en la sociedad chilena. Con los medios ejerciendo su rol como “cuarto poder”, había llegado la hora de iluminar a otros actores que han marcado la historia reciente del país.

Al incorporar a estos nuevos objetos de investigación, estos libros dieron cuenta de un cuadro mayor, en el que el poder se había desplazado o diversificado. Algo que, fuera del periodismo, fue sistematizado al inicio de esta década por Antonio Cortés Terzi en su libro *El circuito extrainstitucional del poder*, en el que el sociólogo describió un opaco sistema de toma de decisiones políticas donde intervienen las *instituciones tradicionales* del Estado, pero también actores privados conscientes de su influencia. Actores, en definitiva, *extrainstitucionales*.

Así, mientras la industria se concentró en fiscalizar a los tres poderes del Estado, el periodismo de investigación que se ocupó

del poder informal ha sido preferentemente desarrollado por reporteros fuera del alero de los medios. Una suerte de periodismo *de autor* cuyo formato por excelencia sigue siendo el libro.

En este nuevo cuadro de poder, un lugar privilegiado lo ha alcanzado el empresariado, sector al que Cortés Terzi define como el gran ganador del período, y cuya relación con la política de fines del siglo XX y comienzos del XXI ha sido abordada por el ex ministro Genaro Arriagada en su libro *Los empresarios y la política* (2004). Ambos textos constituyen lecturas obligatorias para cualquier periodista de investigación que pretenda dar cuenta acerca de cómo –a través de centros de estudios, fundaciones, *lobbistas*, universidades y los propios medios de comunicación– estos grupos buscan influir en asuntos de interés público, aunque manteniendo un bajo perfil o, derechamente, rehuendo el escrutinio público.

La propia Monckeberg intenta un acercamiento a algunos de estos tópicos en *El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno* (2001) o *La privatización de las universidades en Chile. Una historia de dinero, poder e influencias* (2003), donde esboza parte de los cambios en la clase empresarial posdictadura. Un enfoque más compenetrado con el elaborado circuito descrito por Cortés Terzi está en *La guerra y la Paz Ciudadana* (2001), de Juan Andrés Guzmán y Marcela Ramos, libro en el que se examina cómo la Fundación Paz Ciudadana, liderada por Agustín Edwards, se constituyó en los 90 en un espacio donde confluían viejos antagonistas políticos y desde el cual se instalaría en la agenda pública la preocupación por la seguridad ciudadana, cuando las cifras mostraban que eran otros los problemas sociales más urgentes de ese momento.

Es en este punto donde la pauta del periodismo *de autor* y la de los medios ha

vuelto a disociarse. A diferencia de fines de los 90, cuando la industria se acopló al nuevo trato entre periodistas y autoridades, simbolizado por *El libro negro...*, no hemos generado aún una cultura en la que los medios demanden también una rendición de cuentas a los sujetos privados cuando éstos buscan legítimamente moldear a la sociedad en función de sus propios intereses o cuando participan en ámbitos que impactan al conjunto de la sociedad.

Es un fracaso, en ese sentido, que no hayan sido los medios los que destaparan el caso de colusión de precios entre las farmacias. O que no sea común leer artículos acerca de si las empresas cumplen o no con las políticas medioambientales, laborales o tributarias que las rigen. También, que aún sean muy tímidos los esfuerzos por dar cuenta de la influencia de estos actores *extrainstitucionales* en la definición de las políticas públicas y el modelo de desarrollo chileno. Un capítulo de la historia reciente que el periodismo no ha abordado con el mismo ímpetu de los 80 y 90.

Es un hecho que en este terreno los medios lidian necesariamente con las restricciones propias del avisaje y, por ende, con la necesidad de conquistar a las audiencias masivas. Al revés, el periodismo de investigación *de autor* –el que depende de la voluntad de los reporteros y no de los intereses de la industria– puede darse el lujo de no considerar las preferencias masivas de las audiencias y goza, en general, de una mayor independencia económica. Por otro lado, si se considera que todo buen periodista es aquel que está dispuesto a que la evidencia eche abajo sus propios prejuicios, resulta más fácil cuando hay uno, dos o, con mucho, tres autores comprometidos en una investigación. Y aunque esto no siempre se logra, es claro que los prejuicios de la industria han resultado ser más incombustibles.

Por lo mismo, el periodismo de investigación sigue siendo un oficio más bien solitario, destinado preferentemente a la elite. Su patrimonio es que puede definir su propia pauta, cuestión que en los últimos 30 años ha permitido sumar nuevos actores al escrutinio público, algo esencial para la salud de la democracia. De la masificación de este nuevo giro depende, entonces, que el periodismo de investigación se consolide como un contrapeso del poder y continúe documentado la historia de Chile, cuestión esencial en una democracia. Y es que en la medida en que el periodismo hace bien su trabajo, se fortalece la percepción de que alguien está preocupado de develar aquello que otros quieren ocultar, de que el poder formal o informal será confrontado, y de que lo opaco se volverá más transparente.

